

Imprimir

Los demócratas parecen incapaces de organizar una oposición real a Donald Trump. Su debilidad es el resultado de décadas de vaciamiento del partido, en las que el movimiento sindical ha sido desplazado por una multitud de grupos de interés y organizaciones sin fines de lucro.

Las primeras semanas del segundo mandato presidencial de Donald Trump comenzaron —como tantos eventos que definieron sus primeros cuatro años en el cargo— con una búsqueda nacional de categorías. ¿Cuál era la mejor manera de describir los despidos masivos de funcionarios públicos, la confiscación de miles de millones de dólares en fondos asignados por el Congreso, las desapariciones y detenciones arbitrarias, y las negativas a acatar las órdenes judiciales sobre estas maniobras? ¿Un golpe de Estado o una crisis constitucional? ¿Una ampliación de los límites del cargo o una ruptura de la separación de poderes? Preguntas como estas rondaban las páginas del Washington Post y Foreign Affairs y las entrevistas en la radio pública, por no hablar de las listas de correo de los juristas. Estas eran, a estas alturas, líneas de investigación bastante familiares. No habrían estado fuera de lugar en los voluminosos títulos de ciencias sociales e historia que se materializaron en los estantes de las librerías de los aeropuertos para procesar el primer mandato de Trump, libros con portadas monocromáticas y títulos como *How Democracies Die*

Si las preguntas eran ecos del pasado, la realidad que pretendían clasificar no lo era. Los primeros meses de 2017 se caracterizaron por intentos caóticos, pero finalmente vacilantes de una administración que no estaba del todo preparada para ocupar el vacío de poder. Las semanas posteriores a la segunda investidura de Trump revelaron una administración con una apariencia de manual para apoderarse del Estado, articulado por equipos de transición presidencial como el plan Proyecto 2025 de la Heritage Foundation. Los planes trajeron consigo un grupo más coherente de líderes examinados por la operación política de Trump, en contraste con la variopinta pandilla de funcionarios republicanos que rodearon al presidente en 2017. En el centro de estas operaciones estaba el hombre más rico del mundo, Elon Musk, a quien (hasta su complicada ruptura con el presidente) se le había permitido acceso sin restricciones a la interfaz técnica de las agencias federales, incluido el acceso a los sistemas de pago y gestión de personal. Estas diferencias se vieron reforzadas por un

nuevo clima legal; En su decisión en el caso Trump contra Estados Unidos (2024), la Corte Suprema extendió la doctrina de la inmunidad presidencial a todos los actos oficiales del presidente. Si los límites del ejecutivo eran una serie de puertas que simulaban ser muros, estaban abiertos. A finales de febrero, no estaba fuera de lugar que Trump escribiera en sus cuentas personales de X y Truth Social que «quien salva a su país no viola ninguna ley».

Quizás ninguna diferencia fue tan marcada como la ausencia inicial de una oposición política visible. Los líderes del Partido Demócrata parecían incapaces de procesar el asalto a la arena política que se avecinaba. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, resumió la postura estratégica inicial del partido, que se hacía pasar por muerto, en una conferencia de prensa en febrero: “¿Qué influencia tenemos? Los republicanos han sermoneado repetidamente a Estados Unidos: controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia. Es su gobierno”. En los meses siguientes, las protestas públicas se intensificaron, con el despido de decenas de miles de empleados federales, la cancelación de cientos de miles de millones de dólares en subvenciones federales y el envío de extranjeros a centros de detención del ICE o, peor aún, a un gulag en El Salvador. Aun así, aunque la segunda venida de la “resistencia” de Trump haya logrado superar la escala de la primera, su impacto se ve atenuado por la ausencia de una marcha inicial central como la que reunió a quinientas mil personas en Washington, D. C., en enero de 2017. Incluso cuando millones de estadounidenses participan en protestas nacionales, como ocurrió a principios de abril de 2025, los periódicos de todo el país ocultan las acciones de protesta en las últimas páginas. En cualquier caso, las formas de oposición más visibles e impactantes no han provenido del propio partido opositor.

Hakeem Jeffries resumió la estrategia inicial de “hacerse el muerto” del partido en una rueda de prensa en febrero: “¿Qué influencia tenemos? Los republicanos han sermoneado repetidamente a Estados Unidos: controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia. Es su gobierno”.

Sin embargo, si los demócratas se han mostrado reacios a asumir el papel de oposición leal, no se debe —como temían los analistas liberales— a la supuesta normalización de Trump, y

mucho menos a la aprobación pública de su enfoque de gobierno o a la consolidación de una nueva mayoría republicana. Tampoco se trata simplemente —como han alegado los críticos del partido desde al menos la última década del siglo XX— de que los demócratas y sus aliados en el periodismo liberal simplemente hayan perdido el talento para contar historias que conecten con los votantes de clase trabajadora en lugar de con los consultores y profesores. Si bien los líderes del partido parecen alérgicos a las fórmulas políticas que involucren cualquier cosa que pueda etiquetarse como populista —como lo demuestra la marginación de Tim Walz durante la campaña de 2024—, la baja reputación política se entiende mejor como un síntoma.

Entre otras cosas, unas relaciones públicas débiles son sintomáticas de una estructura de partido político que, en palabras de Daniel Schlozman y Sam Rosenfeld, se ha vaciado en las últimas décadas, incapaz de controlar funciones clave como la selección de candidatos, la recaudación de fondos y la formulación de políticas, que se delegan cada vez más a una red de grupos externos, los medios de comunicación y donantes adinerados. Si bien el vaciamiento es el patrón dominante en los sistemas de partidos de las democracias ricas, se ha manifestado de maneras muy divergentes. Por su parte, el Partido Republicano se ha convertido, tanto a nivel de élite como de masas, en una red de organizaciones de movimientos ideológicos orientadas en torno a un conjunto amorfo de principios ideológicos que abarcan desde una reducción radical del gasto redistributivo y una postura cada vez más excluyente respecto a la inmigración hasta la preservación de los valores tradicionales y las estructuras familiares. El vaciamiento de los demócratas, en cambio, ha implicado el desplazamiento del movimiento sindical por un campo cada vez más denso de grupos de interés y organizaciones sin fines de lucro. El nexo común entre estos grupos no es su compromiso con un conjunto de principios o identidades ideológicas, sino su apego a los programas públicos. La naturaleza de estos programas varía ampliamente e incluye importantes gastos sociales (Seguridad Social, Medicare y Medicaid), regímenes de derechos (la Ley de Derechos al Voto) y una serie de programas distributivos que van desde Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario hasta premios de la Fundación Nacional de Ciencias.

El vaciamiento de los demócratas ha implicado el desplazamiento del trabajo organizado por un campo cada vez más denso de grupos de interés y organizaciones sin fines de lucro.

Es lógico que el Partido Demócrata, una vez vaciado, adopte la forma de una red flexible de grupos clientelares políticos en lugar de ideólogos comprometidos. A largo plazo, las reformas de la Era Progresista, como el sistema de méritos y el voto secreto, no solo cortocircuitaron los sistemas locales de clientelismo y debilitaron el poder de los líderes del partido; el New Deal proporcionó una amplia gama de nuevos servicios sociales que estaban en gran medida aislados del control de las máquinas del partido. A medida que el Estado absorbió estas funciones tradicionales del partido, también favoreció formas relativamente nuevas de organización (grupos de presión, lobbies, organizaciones de bienestar social) para presentar reclamos al gobierno. La fragmentación del panorama político continuó a ritmo acelerado a medida que la inversión del gobierno federal en programas sociales crecía durante la Gran Sociedad, lo que impulsó la formación de grupos de interés centrados en políticas y destinó recursos federales a organizaciones sin fines de lucro, que se convirtieron en canales críticos para la prestación de servicios de bienestar. A principios de la década de 1970, el Congreso también había comenzado a construir un “estado litigioso”, que incentivaba las demandas privadas como medio para hacer cumplir las nuevas regulaciones federales en todos los ámbitos, desde los derechos civiles hasta la protección ambiental. Esta transformación fragmentó aún más el poder al impulsar la creación de numerosas organizaciones jurídicas de interés público que trasladaron el conflicto político al ámbito legal. La estructura organizativa del Partido Demócrata era ahora un conjunto desorganizado de expertos en políticas, abogados y organizaciones de defensa.

Oficialmente, estos grupos tenían lealtades hacia los beneficiarios de los programas que constituían su razón de ser, y no hacia los partidos políticos. Sin embargo, el firme control de los demócratas sobre el poder legislativo durante el ascenso de lo que los politólogos Karen Orren y Stephen Skowronek denominan el “estado político” lo convirtió en el partido de facto de los grupos clientelares políticos, una organización cada vez más numerosa que con el tiempo llegó a abarcar desde organizaciones identitarias hasta las altas finanzas. La revolución de Reagan y su ataque a las ideas centrales y las alineaciones políticas del

régimen del New Deal arrojó a estos grupos clientelares aún más firmemente a los brazos de los demócratas.

Pero la alianza ha aportado poco en términos de estabilidad política para los demócratas o de avances políticos para las partes interesadas a las que los grupos clientelares afirmaban representar. Por su parte, como argumentan los politólogos Dan Galvin y Chloe Thurston, los demócratas han llegado a considerar la formulación de políticas como un sustituto de la construcción del partido. Sin embargo, los programas —especialmente los tecnocráticos y orientados al mercado que atraen el afecto de la intelectualidad del partido— no contribuyen a alianzas electorales duraderas. En todo caso, el estilo programático tardío de los demócratas solo ha roto aún más los vínculos entre el partido, el Estado y el electorado.

Quizás más importante aún, los grupos clientelares políticos están mal posicionados para articular amplias demandas públicas o para participar en acciones colectivas que las garanticen. No solo carecen del poder estructural del trabajo o el capital, sino que también carecen de las bases de afiliación masiva necesarias para negociar con los funcionarios electos dentro del Partido Demócrata. Al enfrentarse a conflictos políticos, tienden más a buscar victorias fragmentadas o a preservar las conquistas existentes en lugar de ampliar el horizonte político. El hecho de que estas organizaciones, incluso cuando cuentan con miembros que pagan cuotas, rara vez se constituyan como democracias miembros limita aún más sus incentivos y capacidades para participar en un conflicto político sostenido. Están diseñadas para preservar el statu quo legislativo anterior. Cuando esto resulte imposible, se encontrarán en un impasse.

Y si bien es probable que el ataque de la administración Trump contra el Estado administrativo afecte los derechos y beneficios que aprecian los grupos clientelares de políticas, a estas organizaciones les ha resultado difícil organizar una contraofensiva tenaz que se extienda más allá de los tribunales. Incluso si tienen éxito en los litigios, suponiendo que la administración Trump no ignore simplemente las órdenes judiciales, esto ofrece a los demócratas pocos incentivos para reformular su agenda. Unir a los electorados dispersos y fragmentados afectados por el ataque de Trump a la democracia dependerá en parte de si

los demócratas logran trascender la política del liberalismo programático y adoptar una fórmula política alternativa. Esta fórmula debe basarse en centrar los llamamientos en las preocupaciones materiales de la clase trabajadora y generar solidaridad mediante el trabajo organizativo en las unidades más pequeñas de la geografía política.

### La vieja nueva política

En un gélido día de enero de 1995, Ted Kennedy —quien entonces iniciaba su sexto mandato como el “león” del Senado estadounidense— hablaba en un almuerzo en el Club Nacional de Prensa, y estaba en pie de guerra. Su partido acababa de sufrir graves derrotas en las elecciones intermedias de 1994, y su liderazgo, ahora bajo el mando de los conservadores Nuevos Demócratas (un grupo que incluía al presidente Bill Clinton), se preparaba para virar aún más a la derecha. Kennedy no lo toleraba. Los liberales gozaban de un amplio apoyo público en temas como la atención médica universal, las prestaciones económicas para los pobres y los asuntos que importaban a las familias trabajadoras de pueblos de Massachusetts como New Bedford y Fall River. Si los demócratas se escudaban, “consintiendo tímidamente” las caricaturas republicanas de sus valores, perderían, y se lo merecerían. “Lo último que necesita este país son dos partidos republicanos”, dijo Kennedy. Perdería esta batalla por el alma de este partido, ya que los demócratas desempeñarían un papel principal en el ataque a los programas contra la pobreza y la creciente privatización de gran parte del Estado de bienestar.

«Lo último que necesita este país son dos partidos republicanos».

Lo que estaba en juego aquí era algo más que una batalla ideológica entre los últimos vestigios de la coalición del New Deal y los neoliberales que ganaban terreno en los partidos de centroizquierda de las democracias ricas de todo el mundo. Más bien, los demócratas se habían visto vaciados organizativamente. En las décadas que precedieron a su derrota en las elecciones intermedias de 1994, los demócratas —mediante una combinación de reformas

institucionales y rupturas en la coalición del New Deal— ya no podían desempeñar un papel protagónico en la organización de la democracia. Tras los cambios en los procedimientos de nominación y las leyes de financiación de campañas, el partido delegó, en la práctica, el reclutamiento de candidatos y la organización de las campañas en organizaciones externas adineradas. La planificación política pasó a ser objeto de una red cada vez más densa de centros de estudios y grupos de interés estrechos y sin miembros. Esto convirtió al partido no solo en una presencia cada vez más marginal en la vida de los votantes, sino también en incapaz de resolver problemas de coordinación y de establecer una agenda pública de amplio atractivo. Que las causas de Kennedy gozaran de un amplio apoyo público mientras que su partido no, fue, por lo tanto, un resultado previsible de estos cambios.

Sin embargo, la vacuidad no fue la única característica distintiva que adquirió el Partido Demócrata durante las últimas décadas del siglo XX. A medida que la coalición improvisada del New Deal, compuesta por maquinarias políticas urbanas de etnia blanca del norte, sindicatos y enclaves de las leyes de Jim Crow, cedió, el partido atrajo a una creciente base de liberales profesionales, educados y cada vez más adinerados. Estos eran, literalmente, los hijos de las mismas instituciones laborales, políticas de vivienda y mecanismos de financiación de la educación superior de la posguerra que habían dado origen a los extensos suburbios en los que vivían.

Si bien los liberales de clase profesional dejaron huella en el Partido Demócrata, tanto como base electoral como cuadro dirigente, su legado ha sido sumamente contradictorio. En las últimas décadas, la opinión pública ha reflejado una persistente inclinación hacia el liberalismo operativo, con amplios sectores de la población apoyando políticas que abarcan desde el seguro médico universal hasta programas universales de preescolar. Sin embargo, el liberalismo en sí mismo, como identidad social y filosofía pública, se ha asociado cada vez más con una mezcla de control paternalista del tono y soluciones políticas tecnocráticas o economicistas que no cumplen las nobles promesas de prosperidad compartida. La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible de 2010 es una perfecta materialización de estas políticas. A pesar de resultar en mejoras significativas en la cobertura del seguro médico para casi diecinueve millones de estadounidenses, la infraestructura de la política

dependía de una combinación de mecanismos de mercado torpes y opacos y programas sujetos a la comprobación de recursos que resultaban difíciles de comprender para los consumidores. Las reformas del programa para el mercado individual también se basaron inicialmente en un incentivo fiscal que, en lugar de proporcionar a las personas sin seguro una generosa fuente de seguro estatal, imponía una penalización a quienes no contrataban cobertura privada, un ejemplo evidente de paternalismo neoliberal. No es de extrañar que el índice de aprobación del programa no superara el 50 % hasta que los republicanos amenazaron con derogarlo en 2017.

Al mando de la coalición demócrata, se puede contar con que los liberales de clase profesional diseñen programas que entierren los beneficios populares en una red de complejos créditos fiscales y asociaciones público-privadas, impregnada de conceptos políticos abstrusos que pocos votantes, incluso simpatizantes leales del partido, pueden reconocer. Pero estas críticas al pensamiento tecnocrático podrían aplicarse con la misma facilidad a la clase consultora de las administraciones Clinton y Obama que a los arquitectos más patricios del New Deal. La diferencia, por supuesto, radica en que los liberales de clase profesional han abandonado, consciente o inconscientemente, incluso la pretensión de reformar el capitalismo que mantuvieron sus ancestros. En un par de vigorizantes historias del partido, Lily Geismer ha ilustrado que los gerentes y analistas políticos que dominaban cada vez más las altas esferas del liderazgo demócrata han reestructurado los compromisos del New Deal para abordar la pobreza y la inseguridad material como instrumentos para la disciplina laboral y la acumulación de capital.

Se puede contar con que los liberales de clase profesional diseñen programas que entierren los beneficios populares en una red de complejos créditos fiscales y asociaciones público-privadas, inundadas de conceptos políticos abstrusos que pocos votantes pueden reconocer.

Sin embargo, como Geismer demuestra con habilidad, si bien la transformación del Partido Demócrata no se produjo de arriba hacia abajo, tampoco surgió simplemente de abajo hacia arriba. Fue, en cambio, una transformación a nivel medio, arraigada en una vasta coalición de organizaciones profesionales que llegaron a definir la coalición del Partido Demócrata,

tanto como fervientes demandantes de políticas públicas como campo de entrenamiento para los futuros funcionarios electos, recaudadores de fondos y altos directivos del partido. Estas organizaciones fueron el núcleo de lo que se conoció, en la jerga de la ciencia política de la década de 1970, como la Nueva Política. Organizaciones activistas, centradas en temas específicos y que apoyaban las regulaciones ambientales, la protección del consumidor y la justicia social, no solo trastocaron la vieja política de intermediación política partidista, sino que incorporaron nuevas preocupaciones posmaterialistas, propias de los votantes profesionales y los activistas. En lugar de la negociación silenciosa y transaccional de décadas anteriores, estas organizaciones inyectaron un nuevo impulso moralista en la esfera pública. Este tono se comunicaba no mediante interacciones en las puertas de las casas ni en las fábricas, sino a través de las nuevas tecnologías: correo directo, encuestas y, en pocos años, la televisión por cable. A nivel masivo, grupos de interés más pequeños, pero mejor informados se convirtieron en el objetivo de la comunicación política, mientras que amplios sectores de los fieles del partido podían inscribirse como miembros-consumidores de grupos como el Sierra Club, la Asociación Nacional de Pasajeros de Ferrocarril o la Coalición Nacional de Viviendas para Personas de Bajos Ingresos.

Sin embargo, los dos partidos principales atrajeron dos tipos diferentes de redes temáticas. Mientras que los demócratas conformaron un conjunto fragmentado de intereses grupales, la coalición organizativa republicana se construyó en torno a un conjunto más coherente de grupos ideológicos cuyo objetivo declarado era limitar el alcance del gobierno federal. Esta asimetría tiene mucho que ver con las políticas que los propios demócratas habían creado. Para comprender por qué, es útil rastrear cómo surgieron estos grupos en primer lugar. Durante los primeros años de la posguerra, la política estadounidense se definió por un sistema de grupos de interés relativamente limitado y estable, dominado por importantes grupos empresariales y asociaciones comerciales. La proporción de grupos con fines de lucro y sin fines de lucro establecidos en Washington, D. C., era de tres a uno. Sin embargo, para la década de 1960, un número creciente de movimientos sociales, redes de activistas y profesionales de la política se unieron para producir una serie histórica de cambios políticos: lo que el politólogo Bryan Jones y sus colaboradores denominan una “gran ampliación” del papel del gobierno en la vida estadounidense. La expansión de los programas

gubernamentales impulsó una explosión en el número de grupos organizados. Durante la primera década de ampliación, el engrosamiento del sistema de grupos de interés estuvo definido por organizaciones de clientes políticos al estilo de AARP, pero en una escala mucho menor.

#### Densidad de afiliación sindical y formación de grupos de interés, 1966-2001

Los agentes del capital en Washington, inicialmente sorprendidos por estos acontecimientos, pronto se pusieron al día. Entre 1975 y 1985, el número de organizaciones que representaban al sector financiero y del comercio interior aumentó en un tercio. Estas organizaciones pronto demostraron ser mucho más eficaces en el ámbito político. Entre 1998 y 2012, la proporción de los gastos de cabildeo empresarial respecto a los gastos de grupos de interés difusos y sindicatos aumentó en dos tercios.

Estos cambios en el sistema de intereses organizados se reflejaron en una disminución de la densidad sindical, el indicador más fiable del poder de la clase trabajadora (véase la figura 1). La afiliación sindical se redujo del 24% de los trabajadores asalariados en 1973 a poco más del 10% en 2023. La huella de este cambio en el ámbito político fue significativa. Entre 1969 y 1982, la AFL-CIO recibió la mayor cobertura televisiva de cualquier grupo o asociación en la política estadounidense, y el sindicato United Auto Workers ocupó el sexto lugar. Ninguno de los dos sindicatos figuraba entre los veinte primeros en 1995, ni tampoco ningún otro, salvo la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol. Si bien hoy en día los afiliados sindicales se cuentan por millones, el ámbito político nacional está cada vez más dominado no por coaliciones laborales, sino por organizaciones que representan a pequeños grupos de beneficiarios de las políticas. De estas, solo unas pocas cuentan con una base de afiliados masiva. Incluso cuando existen, estas bases de afiliados son tratadas en gran medida como donantes o consumidores pasivos, en lugar de participantes en la lucha política.

El movimiento sindical fue un componente fundamental de la coalición demócrata durante las primeras décadas del siglo XXI. Sin embargo, los líderes sindicales se enfrentaron a un

entorno de negociación recientemente fragmentado, donde era mucho más fácil para otros grupos de la coalición del partido desarrollar una mayor independencia, lo que impidió que el movimiento sindical desempeñara un papel central en la agregación de intereses. En este contexto, el movimiento sindical tuvo dificultades para construir mayorías en el Congreso que apoyaran programas sociales de gran alcance, por no hablar de cambios legales para reforzar sus vulnerabilidades. A medida que la capacidad disruptiva del movimiento sindical disminuía, los demócratas se enfrentaban al reto de negociar una coalición cuyas organizaciones miembros tenían pocos puntos de intersección entre sí, vínculos limitados con amplios sectores del electorado y, quizás lo más importante, ningún acceso a fuentes de poder estructural.

### Linajes del Estado Político

Que los demócratas se hayan convertido en el partido de las organizaciones clientelistas de políticas no ha, considerando todos los aspectos, atraído mucha atención como una fuente de vulnerabilidad política. De hecho, la explosión de grupos que han crecido a la sombra del estado de la política se cita más rutinariamente como evidencia de los éxitos políticos del partido. Entre los científicos políticos se ha convertido en un artículo de fe que las políticas tienen el potencial de rehacer la política. Podría decirse que el primero en articular esta fórmula fue EE Schattschneider, cuyo libro de 1935, *Política, presiones y aranceles*, ilustró cómo las políticas proteccionistas ayudaron a hacer crecer las industrias que se convirtieron en sus “legiones combatientes” cuando los aranceles fueron atacados. Las políticas podrían fácilmente destruir intereses, escribió Schattschneider: “Los perdedores se adaptan a las nuevas condiciones que se les imponen, se encuentran sin los medios para continuar la lucha o se desaniman y quiebran”.

Esta perspectiva ha tenido profundas implicaciones para las teorías de la democracia económica. Si un plan nacional de pensiones crea sus propios y poderosos grupos de apoyo, su existencia ya no dependerá de los sindicatos, las organizaciones de movimientos sociales

y los partidos de izquierda que lo crearon en primer lugar. Por lo tanto, como Paul Pierson demostraría más tarde en su influyente obra *¿Desmantelando el Estado de Bienestar?*, incluso cuando los “recursos de poder de la izquierda” —sindicatos y partidos de izquierda con una membresía masiva y electoralmente formidable— se agotaron en las últimas décadas del siglo XX, los programas sociales que los partidos de izquierda habían ayudado a crear se mantuvieron firmes frente a los esfuerzos de los gobiernos neoliberales por destruirlos. Menos de una década después, *How Policies Make Citizens*, de Andrea Louise Campbell, descubrió una gran cantidad de evidencia sobre cómo la Seguridad Social moldeó el comportamiento político a nivel de masas. Tras la expansión de los beneficios del programa entre su aprobación en 1935 y principios de la década de 1960, los recursos e incentivos de las personas mayores para participar en política se dispararon, al igual que la membresía en nuevas organizaciones como AARP. Estas organizaciones ayudaron a resolver los problemas de acción colectiva de las personas mayores, reduciendo los costos de la participación política y brindando a sus miembros incentivos selectivos que abarcaban desde lo material (descuentos en bienes y servicios) hasta lo solidario (compromiso social) y lo intencional (incidencia política). La política no solo transformó a las personas mayores de un bloque de votantes relativamente inerte a uno poderoso; la rapidez de reflejos del lobby de las personas mayores frustró innumerables esfuerzos por recortar beneficios.

Esta fórmula —nuevas políticas crean nueva política— contenía al menos algunas dificultades, como admitieron abiertamente sus defensores. En primer lugar, todas las políticas generan una nueva política, pero no siempre de una manera que promueva la eficacia política y la ciudadanía social. Los programas sujetos a la comprobación de recursos, cuyos principales beneficiarios eran políticamente débiles y podían ser catalogados como inmerecedores, no crean una base sólida de apoyo a nivel masivo. En cambio, su permanencia política depende de coaliciones con actores económicos más poderosos. En el caso de los cupones de alimentos (posteriormente rebautizados como SNAP), se trataba del lobby agrícola. En lo que respecta a Medicaid —la mayor fuente de seguro médico para estadounidenses de bajos ingresos y con discapacidad—, se trataba de una combinación de gobernadores estatales, proveedores de atención médica y, cada vez más, empresas privadas de atención médica administrada que mediaban en la relación entre el paciente y el

estado.

En segundo lugar, las políticas también pueden diseñarse de forma que impidan que los beneficiarios reconozcan sus ganancias. En lo que respecta a las principales prestaciones sociales en Estados Unidos, los programas sociales directos como la Seguridad Social son la excepción a la regla. Si bien el Estado estadounidense llegó a desempeñar un papel mucho más importante en la vida de los ciudadanos a lo largo del siglo XX, no fue a través de los proyectos altamente visibles del New Deal, al estilo de la Administración de Progreso de Obras, sino a través de medios indirectos: subvenciones a los gobiernos estatales y locales, deducciones fiscales para los intereses de las hipotecas, subsidios para empleadores que ofrecen seguro médico a sus empleados y para estudiantes universitarios que solicitan préstamos privados. A principios de la década de 2010, Suzanne Mettler había dado nombre a este vasto pero invisible archipiélago de programas: el Estado sumergido. Su invisibilidad impidió que sus beneficiarios se movilizaran políticamente. En todo caso, concluyó Mettler, el Estado sumergido solo contribuyó a deprimir el apoyo público al gobierno, especialmente en lo que respecta a la redistribución.

En tercer lugar, si bien las nuevas políticas crearon tanto ganadores como perdedores, la experiencia de perder rara vez significó quedar eliminado definitivamente de la competencia. Si bien la Ley de Reforma Tributaria de 1986 eliminó los privilegios fiscales especiales para cientos de grupos de presión, no logró evitar que volvieran al ruedo. En una década, los perdedores se reagruparon y obtuvieron nuevas exenciones fiscales. De igual manera, si bien la administración Obama y los demócratas del Congreso elaboraron cuidadosamente la Ley de Atención Médica Asequible para obtener el apoyo de los sectores de seguros y salud, su aprobación solo avivó la oposición de los perdedores: grupos ideológicos conservadores y organizaciones que representan al sector de las pequeñas empresas, que dedicaron la década siguiente a intentar obstaculizar la implementación de la ley y eliminarla de los estatutos.

En la medida en que las políticas crean nueva política, tienden a ser políticas defensivas, ya que los beneficiarios de las políticas existentes luchan por preservar los avances que ya han

logrado mediante intentos de recortes.

En cuarto lugar, en la medida en que las políticas generan nuevas políticas, tienden a ser políticas defensivas, ya que los beneficiarios de las políticas existentes luchan por preservar los avances que ya han logrado gracias a los intentos de recortes. Sin embargo, como argumentó por primera vez Jacob Hacker, alumno de Pierson y posteriormente colaborador, en un artículo emblemático de 2004 en la *American Political Science Review*, el statu quo no es un punto fijo. Más bien, las políticas deben actualizarse periódicamente en respuesta a los cambios en sus entornos: no solo deben ajustarse los pagos de la Seguridad Social a la inflación, sino que deben modificarse para tener en cuenta las fluctuaciones en el panorama de las prestaciones de pensiones privadas. De no hacerlo, se produce lo que Hacker denomina deriva política.

Desde la década de 1970, los empleadores en Estados Unidos dejaron de ofrecer planes de pensiones de beneficios definidos para optar por planes de contribución definida, cuyos beneficios dependen de las contribuciones de los trabajadores y de la tasa de rendimiento. Dado que el Seguro Social se erige ahora como la única fuente de ingresos garantizados para la jubilación, aislada de las presiones del mercado, se ha convertido en una fuente de ingresos mucho más importante para los trabajadores jubilados de lo que se pretendía inicialmente. Para uno de cada siete trabajadores jubilados, el Seguro Social representa ahora el 90 % de sus ingresos anuales. Para cuatro de cada diez jubilados, proporciona al menos el 50 %. Si bien AARP y otras organizaciones para personas mayores han tenido éxito en evitar recortes al Seguro Social, tienen mucho menos éxito en articular una visión positiva para adaptar el programa y evitar su lenta erosión.

Clientelas políticas y acción colectiva

Podría decirse que la interpretación más común de estas cuatro complicaciones de la fórmula “la política hace la política” es tecnocrática: si se diseñan correctamente, los programas sociales emancipadores pueden crear un panorama de organizaciones que ayuden a compensar el declive de los recursos de poder tradicionales de la izquierda. Según esta

teoría, cuando las políticas otorgan niveles adecuados de beneficios a un electorado suficientemente amplio (y, por lo tanto, políticamente poderoso), desencadenarán un efecto dotación que movilizará a los beneficiarios contra los esfuerzos por recortar el estado de bienestar. Dichos beneficios también proporcionarán a los beneficiarios (y a las organizaciones que los representan) recursos materiales que pueden convertirse en acción política en forma de contribuciones de campaña, así como el tiempo necesario para asistir a reuniones y el nivel requerido de campaña y llamadas telefónicas. Y cuando los programas sociales son altamente desmercantilizadores —cuando emancipan a los trabajadores de la dependencia del mercado— tienen el potencial de generar un sentido de solidaridad que fortalece la cohesión social y permite la persistencia de las coaliciones de partidos de izquierda a lo largo del tiempo .

Hay mucho de cierto en esta interpretación. Si algo nos ha enseñado la abundante literatura sobre política social comparada, es que la alergia del gobierno estadounidense al universalismo y la desmercantilización, así como su afición por los programas basados en la comprobación de recursos, los créditos fiscales discretos y la prestación indirecta de servicios, ha tendido a acentuar el carácter pasivo y antipolítico del votante promedio estadounidense.

Sin embargo, la preocupación por las políticas y los programas entre académicos, expertos y estrategas políticos tiene un precio. En particular, exagera la capacidad de las organizaciones clientelares para mantener los compromisos de clase contenidos en los acuerdos de política social. Como todos los participantes en el ámbito político, los beneficiarios solo pueden lograr sus objetivos si pueden resolver el problema de la acción colectiva. Es decir, dado que desean proteger un bien público —por ejemplo, pagos adecuados de la Seguridad Social—, deben encontrar maneras de coordinar la acción, movilizar recursos y mantener la participación a pesar de tener diversos intereses e incentivos para aprovecharse de los demás. Por diversas razones, su capacidad para afrontar estos desafíos no irá más allá del mantenimiento y la defensa de estrechos logros programáticos en el curso de la política habitual. Las clientelas políticas están menos dispuestas a la acción política de base amplia para definir nuevos terrenos, presionando contra el statu quo para ampliar la gama de

beneficios disponibles o la elegibilidad. Estas organizaciones tampoco están bien diseñadas para responder a ataques frontales que trascienden la política habitual —el tipo de recorte ilegal de beneficios que se observa en las acciones de la segunda administración Trump—.

Existen varios problemas claros. En primer lugar, las organizaciones clientelistas de políticas rara vez cuentan con una base masiva de miembros. Solo alrededor del 10% de los grupos de interés organizados en Washington cuentan con miembros que paguen cuotas. Los que sí las tienen prácticamente nunca son democracias con miembros. Si bien AARP cuenta con treinta y ocho millones de miembros, estos individuos no tienen capacidad para votar a los líderes ni para influir en las decisiones políticas de la organización. Esto es lógico, ya que las bajas cuotas anuales de los miembros, de \$20, representan solo el 15% de los ingresos anuales de la organización, que provienen principalmente de regalías y alianzas con empresas que ofrecen productos y servicios, incluyendo planes de seguro, a sus miembros. Por lo tanto, AARP funciona en gran medida como una organización de consumidores. Incluso cuando logra movilizar a una parte de sus miembros para que emprendan acciones colectivas, prácticamente no tiene el monopolio de su lealtad. AARP puede persuadir con la misma facilidad a los beneficiarios de Medicare para que llamen a sus representantes en el Congreso que a las compañías de atención médica administrada que gestionan los planes Medicare Advantage, que amenazan rutinariamente con que las personas mayores perderán su cobertura si el Congreso intenta regular con mayor rigor las prácticas más abusivas de los planes. En lo que respecta a las pensiones públicas, la solidaridad interclasista que AARP ha logrado crear se ha visto mermada durante las últimas cinco décadas por el auge de las cuentas individuales de jubilación privadas. Si bien la organización contribuyó a frenar los intentos de privatizar la Seguridad Social durante la administración de George W. Bush, el panorama político de las pensiones sigue dividido según las clases sociales. Los jubilados de bajos ingresos son mucho más propensos que sus pares de altos ingresos a apoyar una mayor generosidad de las prestaciones de la Seguridad Social.

En segundo lugar, la desconexión de las organizaciones clientelares de políticas con su base de miembros les permite impulsar agendas políticas que contradicen los intereses de sus miembros. El mejor ejemplo de esto es el apoyo de la AARP a la Ley de Modernización de

Medicare de 2003, que otorgó un beneficio complementario privatizado limitado para medicamentos recetados y aceleró la penetración de las empresas privadas de atención médica administrada en el programa Medicare.

En tercer lugar, incluso cuando las organizaciones clientelares de políticas pueden defender los intereses de sus miembros, tienen incentivos para hacerlo de forma limitada y con aversión al riesgo. Como sugieren los análisis de organizaciones de defensa de enfermedades, los grupos con grandes bases de pacientes pueden, y de hecho lo hacen, aprovechar agresivamente su número para impulsar comités clave del Congreso. Sin embargo, estos grupos aún tienden a buscar “entornos políticos no competitivos y distributivos”. En lugar de formar coaliciones con otras organizaciones para impulsar cambios estructurales en el sistema de salud estadounidense, estas organizaciones se movilizan para obtener aumentos limitados en las asignaciones dentro del presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud. De manera similar, al enfrentarse a las propuestas para introducir requisitos laborales de Medicaid durante la primera administración Trump, que tenían el potencial de dar de baja a millones de beneficiarios del programa, las organizaciones basadas en enfermedades fueron mucho más propensas a impulsar exenciones más limitadas de los requisitos para sus miembros que a solicitar el bloqueo total de la introducción de los requisitos.

En cuarto lugar, independientemente del diseño del programa que defienden, las organizaciones clientelares de políticas carecen de una fuente evidente de poder estructural. En comparación con los trabajadores, los beneficiarios de políticas tienen menor capacidad para perturbar la actividad económica mediante huelgas o paros. A diferencia de los capitalistas, los beneficiarios de políticas en general no tienen control sobre la inversión ni la producción. En todo caso, el poder de los grupos clientelares de políticas reside en su capacidad para movilizar a los beneficiarios para que participen en el ámbito electoral, inundando las líneas telefónicas y los buzones de correo de los legisladores y, en raras ocasiones, acampando frente a sus oficinas para protestar. Debido a su falta de acceso a importantes puntos de congestión en la economía, los costos de una acción colectiva exitosa para estas organizaciones superan los de las empresas o los sindicatos. Estos costos son aún

mayores cuando un beneficio que una organización clientelar busca preservar no enfrenta una amenaza inmediata, y la organización, en cambio, intenta asegurar el acceso a nuevos beneficios o modificar una política en respuesta a la deriva.

Incluso si las organizaciones clientelares de políticas pueden defender los programas que las hicieron realidad, carecen de importantes ventajas organizativas que tanto los partidos como los sindicatos han poseído durante mucho tiempo.

En relación con esto, los beneficios que las organizaciones clientelistas de políticas buscan proteger pueden ser más difusos que los que se encuentran en un convenio colectivo. En comparación con los salarios, las condiciones laborales y los beneficios complementarios, los cambios en programas sociales universales, incluso relativamente simples, pueden ser más difíciles de rastrear para los votantes. El problema se agrava cuando los beneficios se otorgan a través de una compleja red de colaboraciones público-privadas, como seguramente sabe cualquier investigador de encuestas que haya preguntado a los encuestados si reciben Medicaid.

En resumen, incluso si las organizaciones clientelares políticas pueden defender los programas que las impulsaron, carecen de las importantes ventajas organizativas que tanto los partidos como los sindicatos —los tradicionales recursos de poder de la izquierda— han poseído desde hace tiempo. Mientras que los sindicatos sin duda enfrentan desafíos asociados con la organización y movilización de las masas, las organizaciones clientelares políticas no solo carecen del poder estructural del movimiento obrero, sino que a menudo están desarticuladas de una base popular y tienen incentivos organizativos que promueven la aversión al riesgo y la búsqueda de beneficios políticos más limitados.

## El matrimonio fallido

Si bien las organizaciones clientelares constituyen partes importantes de la coalición demócrata, tienen dificultades para ejercer influencia política dentro del partido. Esto se debe a que rara vez logran negociar con las piezas más valiosas. Si bien estas organizaciones

pueden subsidiar la actividad legislativa con información y experiencia, rara vez tienen acceso a bases masivas de afiliados. Incluso cuando lo hacen, su relación con estos miembros suele ser bastante limitada; pocos cuentan con los comités de educación política de los que dependen desde hace tiempo los sindicatos. En consecuencia, los grupos clientelares no pueden prometer fácilmente a los demócratas que podrán desbloquear bloques electorales importantes a cambio de acciones favorables en sus agendas políticas. Y quienes afirman representar a un electorado masivo carecen de los amplios fondos de campaña que poseen los intereses organizados más poderosos de Washington. En consecuencia, han demostrado ser en gran medida incapaces de evitar que los demócratas se desvíen hacia la derecha

El caso de la reforma de la financiación de la salud es ilustrativo. En las décadas posteriores a la aprobación de Medicare y Medicaid, los líderes del Partido Demócrata continuaron abogando por lo que entonces se denominaba un plan nacional de seguro médico, precursor de las propuestas de Medicare para Todos de los últimos años. Sin embargo, en los primeros años de la administración Clinton, los demócratas habían abandonado este enfoque en favor de un sistema basado en el mercado y centrado en el empleador, que buscaba ampliar la cobertura mediante la competencia controlada entre aseguradoras privadas. Cuando esta propuesta demostró no poder sortear la vorágine de la contramovilización de la industria aseguradora, el fracaso de la política reforzó la transición de los demócratas hacia soluciones de atención médica basadas en el mercado, que se convirtieron en la columna vertebral de la Ley de Atención Médica Asequible de 2010, también conocida como Obamacare. Sin embargo, incluso en este terreno más limitado, organizaciones progresistas de defensa de la salud como Médicos por un Programa Nacional de Salud y Healthcare-NOW fueron incapaces de presionar con éxito a favor de una opción pública modesta pero políticamente popular, que fue rechazada por la administración Obama y los defensores centristas dentro del partido. Una década después, durante la pandemia de COVID-19 y el ciclo electoral de 2020, los esfuerzos de base por incluir un punto de Medicare para Todos en la plataforma del partido corrieron una suerte similar. Si bien los delegados de Bernie Sanders en el Comité Nacional Demócrata (DNC) de 2020 lograron un punto de acuerdo sobre “Lograr una atención médica universal, asequible y de calidad”, este punto no llegó a la convención del partido de

2024.

Incluso cuando las organizaciones clientelistas políticas han demostrado ser capaces de cambiar la agenda ostensible de los demócratas, el partido ha aprovechado lo que la politóloga Kathleen Bawn y sus colegas denominan el “punto ciego electoral” para tratar las victorias simbólicas como si fueran sustanciales. Durante las negociaciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el gobierno de Obama llegó a un acuerdo con la industria farmacéutica para impedir que Medicare negociara los precios de los medicamentos. A medida que los precios subían durante la década siguiente, las organizaciones de defensa de los pacientes continuaron presionando a los demócratas progresistas para que introdujeran leyes de control de precios. Gradualmente, los demócratas comenzaron a abordar el tema de los precios, pero adoptaron leyes que, en el mejor de los casos, garantizaban que los efectos sobre los precios serían mínimos. El texto finalmente incorporado a la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 permitió a Medicare negociar el precio de solo unos pocos medicamentos en un plazo de implementación que se retrasó considerablemente.

Por supuesto, las organizaciones clientelares de políticas públicas desempeñaron un papel en la prevención de la derogación legislativa de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en 2017. Sin embargo, la coordinación defensiva resultó ser una tarea más sencilla. En primer lugar, no requirió persuadir a los demócratas para que inclinaran sus posiciones hacia la izquierda. De hecho, los demócratas, como era previsible, se unieron en su oposición a la derogación de uno de los logros legislativos más emblemáticos del partido. En segundo lugar, la coalición para defender Obamacare estaba compuesta no solo por los beneficiarios directos de la política, sino también por un grupo de gobernadores estatales, proveedores y aseguradoras que mediaron en la relación entre los beneficiarios y el gobierno federal. Finalmente, estos esfuerzos de apoyo se beneficiaron del hecho de que, incluso al utilizar el proceso de conciliación presupuestaria, los republicanos tenían márgenes estrechos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, así como un amplio conflicto interno sobre los límites precisos de la legislación de derogación.

Se podría contar una historia similar sobre la eficacia de las organizaciones clientelares

políticas para modificar las posturas del Partido Demócrata en diversos temas. Otro conjunto de ejemplos se puede extraer de los esfuerzos por reformar la financiación de la educación superior tras la Gran Recesión. Durante el gobierno de Obama, los grupos de interés estudiantil presionaron para que se regularan las prácticas crediticias abusivas de las universidades con fines de lucro mediante las llamadas normas de empleo remunerado. Sin embargo, la presión de la industria no solo debilitó estas regulaciones antes de su publicación, sino que se derogaron casi por completo durante el primer gobierno de Trump. Los demócratas del Congreso no lograron oponer resistencia seria. Si bien el gobierno de Biden logró restablecer algunas de estas regulaciones, estaban prácticamente muertas para cuando Trump regresó al cargo en 2025.

Para entonces, un nuevo grupo de organizaciones, posiblemente mucho más astuto políticamente, logró llamar la atención de la administración Biden sobre la condonación de la deuda estudiantil. Los sindicatos de deudores, en particular el Colectivo de la Deuda, lograron obtener un plan de alivio de la deuda reducido mediante una orden ejecutiva. Sin embargo, estos grupos se diferenciaban de las organizaciones tradicionales de clientela política en varios aspectos. En lugar de organizar a las personas en torno a un beneficio, las organizaban en torno a la condición económica compartida del endeudamiento. Quizás más importante aún, basaban sus reivindicaciones al estado no en términos de ganancias políticas limitadas, sino en la abolición de la deuda y cambios estructurales en la economía política. Finalmente, mientras que las organizaciones de clientela política se basan en el cabildeo y la acción legal, las tácticas de grupos como el Colectivo de la Deuda estaban orientadas al movimiento, abarcando desde la educación política hasta las huelgas por la deuda. A corto plazo, la victoria resultó efímera. El plan de Joe Biden fue objeto de una demanda que finalmente llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que la anuló. Para 2023, los demócratas carecían de la mayoría legislativa necesaria para posibilitar un cambio más duradero. Finalmente, la estrategia de Biden para la deuda estudiantil fue ampliar el sistema existente de pagos basados en los ingresos, pero limitar los pagos mensuales al 5% de los ingresos discretivos. Sin embargo, en un momento crítico, el debate público sobre el alivio de la deuda había cambiado, y la cancelación se convirtió en una opción creíble. Los resultados de la encuesta revelaron que la mayoría de los estadounidenses apoyaban los

planes de condonación de la deuda.

Sin un amplio trabajo organizativo para ayudar a los votantes a establecer el vínculo entre el partido y la política, los logros programáticos no pueden sustituir la construcción del partido.

A pesar de la derrota en los tribunales, el relativo éxito del Colectivo de Deuda al apelar a la administración Biden ilustra tanto la fortaleza de la organización basada en la membresía como, a su vez, la debilidad del cabildeo tradicional. La falta de vínculos sólidos con las bases masivas de miembros de las organizaciones clientelares políticas les resta influencia ante los demócratas. Sin embargo, esto también significa que los llamamientos electorales de los demócratas basados en políticas no producen los resultados que se supone implica la fórmula de “la política hace política”. Prueba de ello es la considerable lista de estados cuyos electorados otorgaron a Trump al menos una pluralidad de votos, a la vez que aprobaron, entre otras cosas, la ampliación de la cobertura de Medicaid (Nebraska, Montana, Idaho y Utah en 2018; Misuri en 2020; Dakota del Sur en 2022) y la garantía del derecho al aborto (Misuri y Montana en 2024).

De hecho, sin un trabajo organizativo exhaustivo que ayude a los votantes a vincular el partido con la política, los logros programáticos no pueden sustituir la construcción de partidos. Es una característica arraigada en la opinión pública estadounidense que las preferencias operativas de los votantes por el gasto público pueden coincidir con las preferencias filosóficas por un gobierno limitado. Estas discrepancias se han visto reforzadas por el fortalecimiento de las identificaciones partidistas, que ahora constituyen una fuente de identidad más sólida y duradera que la confesión religiosa. Para que una victoria política asegurada por los demócratas se traduzca en beneficios electorales, tendría que irrumpir en la identidad partidista. Esto significaría que la política tendría que ofrecer beneficios tangibles que los votantes percibieran rápidamente.

El estilo programático tardío del Partido Demócrata ha generado políticas con el efecto contrario. La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) son solo los ejemplos más

recientes de esta supresión de los beneficios públicos. Consideremos los discretos subsidios fiscales de la IRA para vehículos eléctricos y energía limpia, apenas reconocibles para los consumidores como un beneficio resultante de un programa federal, o el amplio apoyo de la IJJA a la expansión de la banda ancha, así como a las inversiones en carreteras, puentes y transporte público, todo lo cual se otorga a través del sector privado o de los gobiernos estatales y locales. Como han argumentado los politólogos Dan Galvin y Chloe Thurston, incluso cuando las políticas tienen beneficios visibles, convertir esos beneficios en apoyo partidista requeriría que los votantes comprendan y favorezcan los beneficios de una nueva política, vinculen los beneficios de esa política a un partido, desarrollen vínculos duraderos con ese partido y luego voten en consecuencia. Incluso ante un programa similar a la Administración de Progreso de Obras, esto es simplemente improbable.

Tras las derrotas electorales de los demócratas en 2024, resulta tentador interpretar la escasa vinculación entre los beneficios políticos y los resultados electorales partidistas como prueba de que los esfuerzos por obtener ganancias políticas progresistas no valieron la pena. Sin embargo, esto equivocó el motivo de la desconexión. Los efectos de retroalimentación política necesarios para estabilizar el porcentaje de voto en las elecciones no pueden ser generados por partidos que carecen de amplios vínculos con electorados masivos. Ni la constelación de grupos clientelares sin afiliación ni el propio aparato del partido están diseñados para construir un vínculo entre el partido y las políticas en la mente de los votantes. Esto no solo dificulta que las organizaciones clientelares desvíen a los demócratas de su deriva hacia la derecha, sino que también reduce el impacto electoral de cualquier ganancia política para la clase trabajadora que el partido pueda mantener. Estos resultados no hacen más que reforzar la creencia entre la cúpula del partido de que las políticas que benefician a los votantes de clase trabajadora tienen un bajo porcentaje electoral, lo que permite que la retirada de los demócratas hacia los suburbios adinerados continúe sin cesar. A medida que los estados que históricamente han constituido los bastiones del partido pierden población en relación con los reductos republicanos, hay implicancias obvias —y sombrías— para las contiendas presidenciales reñidas.

Resistencia sin reconstrucción

Más allá del horror absoluto ante la arrogancia autoritaria de la administración, los observadores políticos profesionales afrontaron las primeras semanas del segundo mandato de Trump con indignación ante la ausencia de señales más visibles de indignación entre los estadounidenses. Para abril de 2025, incluso el columnista conservador del New York Times, David Brooks, llamaba a un “levantamiento cívico nacional”. Ante el “encadenamiento” de Trump a las “instituciones más importantes de la vida estadounidense... no tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas”. Sin embargo, incluso cuando la actividad de protesta alcanzó niveles nunca vistos durante la primera administración Trump, muchas de las acciones más trascendentales se desarrollaron en tribunales federales, cuyos expedientes se llenaron de impugnaciones a las actividades de Trump coordinadas por estados, gobiernos locales, empleados federales, organizaciones sin fines de lucro y los grupos clientelares políticos más directamente afectados por la ofensiva de la administración. La estrategia legal se topó con algunos problemas inmediatos, ya que pronto se hizo evidente que la administración Trump tenía pocas intenciones de cumplir con algunas órdenes judiciales que ordenaban el regreso de inmigrantes que habían sido deportados injustamente a una mega prisión de El Salvador o impedir que Musk y su equipo en la nebulosa agencia paralela conocida como el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) detuvieran ilegalmente los pagos de subvenciones federales.

Sin embargo, a pesar de todas sus limitaciones, el litigio tenía una ventaja: no requería el mismo nivel de acción colectiva que otras acciones en la esfera pública. Las organizaciones profesionales se apresuraron a organizar reuniones nacionales por Zoom y “Días de Acción”. Sin embargo, coordinar estas respuestas resultó difícil, especialmente dada la reticencia del liderazgo demócrata a asumir un papel central. A las pocas semanas del caos, organizaciones activistas como MoveOn e Indivisible habían coordinado miles de llamadas telefónicas a las oficinas de los demócratas de la Cámara de Representantes. Los líderes del partido se irritaron ante la insinuación de que se quedaban de brazos cruzados. Más bien, querían transmitir la imagen de que la culpa de los fracasos del gobierno recaía sobre el partido mayoritario. Según un miembro demócrata de la Cámara que pidió no ser identificado, “Había mucha gente que decía: ‘Tenemos que impedir que los grupos hagan esto’. . . A la gente le preocupa que digan que no estamos haciendo lo suficiente, pero no somos

mayoría”.

Para entonces, “los grupos” se habían convertido en una especie de epíteto multiusos para la red dispersa de organizaciones activistas que se había desarrollado durante las décadas anteriores para desafiar el liderazgo del partido desde fuera. Sin embargo, con la decadencia de los partidos tradicionales, estas organizaciones activistas —independientemente de su ideología u orientación política— se convirtieron en elementos perennes de la escena política. El surgimiento de organizaciones de movimientos sociales de clase profesional, como las que organizaron la Marcha de las Mujeres de 2017, así como varias protestas y campañas posteriores, fue un rasgo distintivo del primer mandato de Trump. La organización conocida como Indivisible, fundada en 2017, ofrece una lección práctica en este sentido. Sus orígenes se remontan a una guía en PDF elaborada por cuatro exmiembros del Congreso, cada uno de los cuales tenía raíces no solo en el propio Partido Demócrata, sino también en el complejo de organizaciones clientelares políticas y organizaciones sin fines de lucro dentro de la órbita del partido. A pesar de su relativamente alto nivel de capital político y social, estos profesionales de las políticas rechazaron la política institucional en favor de una estrategia de base poco coordinada. Esto implicó solo un nivel limitado de organización formal. La guía del grupo, que circuló ampliamente gracias a varias cuentas de Twitter de celebridades, proporcionó una plantilla utilizada por casi cuatro mil organizaciones locales que describían tácticas que iban desde manifestaciones en los ayuntamientos del Congreso hasta sentadas y simulacros de muerte en las oficinas de los congresistas en respuesta al intento de los republicanos de 2017 de derogar la Ley de Atención Médica Asequible.

El surgimiento de organizaciones de movimientos sociales de clase profesional, como las que organizaron la Marcha de las Mujeres de 2017, fue una característica definitoria del primer mandato de Trump.

Sin embargo, poco después de proclamar la victoria tras la derrota de la derogación de la ACA, las organizaciones locales y nacionales de Indivisible comenzaron a fragmentarse y se mostraron incapaces de organizarse en torno a lo que se convirtió en el principal impulsor de la creciente desigualdad de ingresos durante la era Trump: la Ley de Reducción de Impuestos

y Empleos de 2017. Para entonces, era hora de comenzar a prepararse para las elecciones intermedias de 2018, un esfuerzo en el que los grupos locales de Indivisible llegaron a participar activamente. En contraste con el brillo progresista de la organización nacional, los mayores beneficiarios de las energías de las organizaciones de Indivisible fueron los demócratas moderados. Aquí, entonces, había un patrón: las nuevas organizaciones de base podían brindar una defensa valiosa contra los caóticos esfuerzos legislativos para eliminar los programas sociales. Sin embargo, a la ofensiva, se vieron empujados en muchas direcciones a la vez. A pesar del éxito de los demócratas en las elecciones intermedias de 2018, una agenda positiva para derrotar al trumpismo resultó esquiva.

Actualmente existe poca literatura dedicada a debatir la aparente profundidad, durabilidad e impronta política del despertar del movimiento de la clase profesional durante el primer gobierno de Trump. Y, al estilo de los científicos sociales que estuvieron muy involucrados en estas organizaciones, estos libros y artículos simplemente sugieren que el legado de la política de “resistencia” es tema de debate. Sin embargo, lo que parece indiscutible es que estos movimientos surgieron del fracaso de las organizaciones clientelares que suplantaron la vieja política de partidos y sindicatos. El mundo exclusivo de la política del Partido Demócrata ya no era suficiente ni siquiera como una perspectiva de carrera aceptable para sus futuros líderes.

Pero si bien organizaciones como Indivisible representaban un rechazo a las formas políticas existentes, luchaban por trascender su rol como antagonistas de Trump, un rol que sus heterogéneas membresías internas prácticamente habían impuesto. La conveniencia política exigía la formación de redes fluidas e informales que carecían de una forma evidente de impulsar las tareas simultáneas de recaudación de fondos, movilización popular y formulación de agenda. Las secciones locales de Indivisible no contaban con flujos de dinero regulares de donantes adinerados, que se concentraban a nivel nacional. Una vez que Biden asumió el cargo, la organización del movimiento pudo ser absorbida o suspendida con mayor facilidad hasta que lo impensable sucediera por segunda vez. Sin embargo, no se podía esperar que estas organizaciones cumplieran un propósito para el que no fueron creadas. Carecían de la escala y la capacidad de intermediación necesarias para resolver los

problemas de coordinación que el Partido Demócrata había sido incapaz de resolver. Y aunque probablemente contribuyeron a impulsar los éxitos de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, no pudieron consolidar los vínculos del partido con un gran número de votantes de la clase trabajadora.

Así, a medida que transcurrían las caóticas semanas del segundo mandato de Trump, el enfrentamiento entre las élites del Partido Demócrata y los grupos activistas sobre la mejor manera de responder al despido cada vez más ilegal del estado administrativo y al ataque a los derechos civiles continuaría. A finales de la primavera, una coalición que abarcaba doscientas organizaciones, desde la Unión Americana de Libertades Civiles hasta los Trabajadores de la Comunicación de América, planeó una jornada de protestas que finalmente movilizaría a millones de estadounidenses. Estos eventos se habían planeado durante meses para coincidir con el desfile militar y la celebración del cumpleaños de Trump el 14 de junio, pero adquirieron un nuevo significado a medida que el gobierno intentaba aumentar sus cifras de deportación secuestrando a trabajadores indocumentados de las calles de Los Ángeles y al requisar la Guardia Nacional de California y desplegar a cientos de marines en el sur de California para sofocar las protestas subsiguientes. A medida que aumentaba el apoyo público a los manifestantes, algunos demócratas, incluido el impredecible gobernador de California, Gavin Newsom, aprovecharon la oportunidad, consolidando un mensaje más coherente de oposición a los excesos autoritarios.

Sin embargo, justo la semana anterior, una coalición de demócratas centristas se reunió en Washington, D.C., para un WelcomeFest financiado por multimillonarios. Este evento, cuyo propósito principal era amonestar a cualquier oposición de principios a la administración Trump, favoreciendo una política basada en la cuidadosa indecisión, la observación electoral y la triangulación, que han sido el leitmotiv demócrata durante décadas. Como recalcaron varios oradores, no fueron los multimillonarios financistas del partido ni los últimos vestigios de los Nuevos Demócratas, sino “los grupos”, los que llevaron al partido a la ruina electoral. Sea cual sea el resultado de este conflicto interno, podría tener poca influencia en la trayectoria destructiva de la administración ni en su resistencia política. Ni los organizadores del WelcomeFest, ni la red de organizaciones clientelares políticas tradicionales, ni siquiera

“los grupos”, están, por el momento, en condiciones de reorientar fácilmente el conflicto para hacer legibles las consecuencias de los aranceles, el golpe de Estado de la DOGE y las devastadoras implicaciones del presupuesto de Trump para millones de votantes de clase trabajadora.

¿Una nueva mirada?

El 18 de febrero de 2025, Ken Martin, recién salido de una victoria en una carrera muy disputada por la presidencia del DNC, emitió un memorando de cinco páginas con el asunto “Los demócratas lucharán contra la guerra de Trump contra los trabajadores”. Publicado el mismo día que Martin comenzó una gira por varios estados para reunirse con líderes estatales del partido y candidatos locales, el memorando expuso lo que él veía como la tarea más urgente de los demócratas: “Reparar y restaurar las percepciones de nuestro partido y nuestra marca”. “Es hora”, dijo Martin, “de recordarles a los trabajadores estadounidenses, y también mostrarles todos los días, que el Partido Demócrata siempre ha sido y siempre será el partido del trabajador”. El escenario de este nuevo comienzo fue un restaurante en el Strip District de Pittsburgh, donde Martin se reunió con miembros de United Steelworkers.

Esa restauración dependía de replantear el cálculo político, sugirió Martin. En marcado contraste con la retórica presidencial demócrata de 2024, el nuevo presidente abandonó la ambigua bandera de la democracia (una palabra que no aparecía en el memorando) por una alternativa con mayor fundamento material: el “poder sindical”. “Como organizador, sé que, por sí solo, nadie puede enfrentarse a los ultrarricos y poderosos”, dijo Martin. “Pero al unirse en un sindicato, los trabajadores han conseguido mejores salarios, protección laboral, atención médica y el fin de semana. Porque la cuestión es la siguiente: los sindicatos amplían las oportunidades para todos los trabajadores, no solo para los afiliados”. En consonancia con esta fórmula, el memorando de Martin reinterpretó las primeras semanas de la nueva administración Trump como una lucha de clases al enumerar las formas en que el presidente “y sus multimillonarios partidarios están empeñados en atacar a las familias trabajadoras y desmantelar los sindicatos que protegen a los trabajadores para enriquecerse”.

El enfoque de Martin hacia las consecuencias materiales del golpe de Estado de Trump y Musk reflejó lo que se estaba convirtiendo en la interpretación principal de las dificultades electorales de los demócratas. “Demasiadas personas ahora mismo sienten que nuestro partido las ha olvidado, que las hemos dejado atrás”, dijo a los trabajadores siderúrgicos en el restaurante de Pittsburgh. “Se están dejando la piel trabajando y no pueden progresar, y eso es lo que realmente debemos reconocer. Mi hermano, carpintero sindicalizado, votó por los demócratas toda su vida. Y luego, en 2016, 2020 y 2024, votó por Trump. Mi suegro, ganadero en el sur de Minnesota, lo mismo”.

Esta apertura coincidía mucho con el discurso de Martin al Comité Nacional Demócrata (CND) durante la contienda por la presidencia. En sus llamamientos públicos durante esa contienda, llegó incluso a citar el himno laboral de Florence Reece de 1931, “¿De qué lado estás?”. “¿Estamos del lado del magnate ladrón, del multimillonario ultrarrico, del contaminador de petróleo y gas, del rompesindicatos?”, preguntó. “¿O estamos del lado de la familia trabajadora, del pequeño empresario, del agricultor, de los inmigrantes, de los estudiantes? Les diré algo: sé de qué lado estoy”.

Si articular esta nueva imagen (o más bien la rehabilitación de una vieja imagen) para los demócratas se convertiría en última instancia en la firma más visible de Martin, sus presentaciones a los miembros del DNC también dejaron claro que veía la marca como algo sin sentido en ausencia de transformaciones organizativas más amplias. De los diez elementos enumerados en el “Nuevo Marco del DNC” propuesto por Martin, la “Identidad de Marca Demócrata” fue el último. En lo que fácilmente podría convertirse en una posdata a los Partidos Huecos de Schlozman y Rosenfeld, las prioridades de Martin se centraron en la construcción del partido. Esto significó, entre otras cosas, revitalizar la financiación a las organizaciones estatales del partido a través del Programa de Asociación Estatal existente de los demócratas, un nuevo esfuerzo para construir organizaciones del partido a nivel comunitario, así como nuevos clubes orientados a la juventud. En lugar de describir al partido como un medio de intermediación para las organizaciones de clientela política existentes, el marco de Martin imaginó un partido compuesto por sus propias organizaciones locales capaces de conectar a los votantes con el liderazgo.

El llamado de Martin a la renovación del partido coincidía con lo que se está convirtiendo en una creencia popular entre los politólogos. Reducidos a la categoría de marca y a una operación de captación de votos en temporada electoral, según la teoría, los partidos se han despojado de sus capacidades más importantes: la capacidad de mediar en la relación entre gobernantes y gobernados y de organizar a un número adecuado de votantes para impulsar un cambio sustancial. Por lo tanto, la renovación de los demócratas requiere más que simplemente reponer los recursos de las debilitadas organizaciones estatales y locales del partido. Exige encuentros presenciales regulares con los votantes para arraigar al partido en la vida cotidiana mediante reuniones, ciclos de conferencias y actividades de ocio. Para generar una participación significativa, estas actividades deben llevarse a cabo en conjunto con las infraestructuras cívicas locales. Estas organizaciones partidarias recientemente revitalizadas también deben contar con canales que vinculen a la opinión pública de base con la agenda nacional del partido.

Se podría suponer que la elección de Martin como presidente del Comité Nacional Demócrata (CND) indica que los líderes del partido comprenden la urgencia de una renovación organizativa. Esto está por verse. Sin embargo, incluso si los líderes demócratas se mostraran optimistas sobre la necesidad de fortalecer las asociaciones a nivel local, el CND es solo una faceta del Partido Demócrata. Si bien Martin parece ser más ambicioso que sus predecesores a la hora de aprovechar los recursos fiscales e ideológicos del comité, se requeriría una transformación generacional en todos los niveles del partido para construir nuevas estructuras asociativas en más de tres mil condados estadounidenses.

Además, y quizás de forma más significativa, cualquier proyecto de renovación tendrá que lidiar con las numerosas funciones que, durante el último medio siglo, se han delegado a organizaciones fuera del control formal de los líderes estatales y locales de los partidos. Por un lado, una parte significativa de las contribuciones financieras que de otro modo irían a las organizaciones de los partidos ahora está a cargo de una batería de organizaciones de defensa, organizaciones sin fines de lucro y centros de estudios que constituyen el universo político de cada partido político principal. A nivel local, son las organizaciones sin fines de lucro, no los partidos políticos, las que desempeñan el papel predominante en la prestación

de servicios y la incorporación política. La tarea de movilizar a los votantes entre elecciones —especialmente, aunque no exclusivamente, a los estadounidenses de clase trabajadora— también se ha vuelto más formidable a medida que la identificación de los votantes con el Partido Demócrata ha disminuido en los últimos años. En una encuesta de Gallup de 2024, el bloque político más grande de Estados Unidos —aproximadamente el 43 % de los adultos estadounidenses— se identificó como independiente. En contraste, el 27 % de los adultos se identificó como demócrata, un nuevo mínimo para el partido en los datos de Gallup.

Para revivir las organizaciones partidarias locales será necesario considerar seriamente cómo ofrecer a los votantes, donantes y socios organizacionales incentivos atractivos para la participación que no pueden obtener en otro lugar.

En resumen, cualquier reforma o desarrollo de un partido que se lleve a cabo se desarrollará en un terreno político ya de por sí denso, donde la competencia por recursos, lealtad y energía seguirá siendo intensa. Quienes defienden el desarrollo asociativo de partidos son muy conscientes de este desafío, por lo que enfatizan que los partidos deben forjar vínculos sólidos con las asociaciones de base de la sociedad civil. Sin duda, se pueden encontrar casos de colaboración entre organizaciones locales de partidos y asociaciones cívicas. Pero unos pocos días buenos no hacen verano. Para revitalizar las organizaciones locales de partidos será necesario considerar seriamente cómo ofrecer a los votantes, donantes y socios organizacionales incentivos atractivos para la participación que no pueden obtener de otras fuentes.

Esto supone, por supuesto, que los líderes de las organizaciones locales del partido estén realmente interesados en la renovación y que se pueda convocar una sólida red de alianzas interorganizacionales para apoyar dicho proyecto. Sin embargo, en muchas ciudades estadounidenses, las mayores reservas de energía política residen en organizaciones y coaliciones externas al Partido Demócrata, y a menudo en competencia con él. En Pittsburgh, por ejemplo, un comité del partido, desgastado, no pudo, a pesar de todos sus esfuerzos, impedir la elección de Sara Innamorato, la contrincante progresista en las elecciones de 2023 para la ejecutiva del condado de Allegheny. En unas primarias muy reñidas, Innamorato

contó con una sólida red de apoyo de los sindicatos de trabajadores de servicios y grupos locales de defensa, cuyo esfuerzo de participación electoral los demócratas simplemente no pudieron igualar. Los partidos asociativos fuertes sin duda contendrán divisiones internas en cuanto a políticas y estrategias, pero no pueden operar sin la capacidad de organizar a los votantes. En ciudades donde la organización del partido está moribunda, cualquier esfuerzo de renovación probablemente comenzará externamente en lugar de internamente, a través del conflicto en lugar de la colaboración.

Es demasiado pronto para decir si el ataque de Trump y Musk al estado será un *deus ex machina* para los demócratas. Si los primeros meses del segundo mandato de Trump sirven de indicio, la comprensión de la gente sobre la relación entre las acciones del presidente y las interrupciones en su acceso a los programas sociales (o al funcionamiento del gobierno en general) es limitada.

Esto no puede atribuirse únicamente al carácter oculto de muchos programas sociales en Estados Unidos, implementados a través del código tributario o mediante redes de proveedores externos. La invisibilidad del Estado tampoco es resultado de las características complejas y obvias del gobierno, como las medidas de control de calidad que se cree protegen las prestaciones del Seguro Social de los estadounidenses de una horda de saqueadores de Silicon Valley. Más bien, la invisibilidad del Estado en la vida de los estadounidenses —la misma razón que permite a Trump atacar los programas públicos sin una crisis política inmediata— tiene al menos tanto que ver con la desorganización de los partidos políticos en redes laxas de aspirantes a políticas públicas y la ausencia de programas políticos claramente articulados. A modo de ejemplo, algunas de las mayores protestas y manifestaciones públicas para concienciar a la opinión pública sobre la toma de poder de Trump fueron coordinadas por personas y organizaciones ajenas al Partido Demócrata.

Los acontecimientos de estos primeros meses de Trump 2.0 ofrecen más indicios de que la renovación organizativa probablemente se deba a presiones externas sobre el Partido Demócrata, en lugar de reajustes conscientes dentro de sus filas. El movimiento obrero tiene

el potencial de desempeñar un papel fundamental en este sentido. Los trabajadores federales están en la primera línea de la purga de Trump, que ha provocado la incorporación de más de catorce mil nuevos miembros a las filas de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales en tan solo cinco semanas. Una mayor militancia entre estos trabajadores podría tener beneficios que repercutan más allá de las agencias federales, al aclarar los riesgos materiales del ataque de Trump para los trabajadores de todo el país. Las órdenes ejecutivas de Trump también podrían impulsar nuevas formas de movilización fuera del estado. Los ataques a la financiación federal en universidades de investigación, por ejemplo, podrían ayudar a crear nuevas oportunidades de solidaridad interclasista dentro de las filas del personal académico. Finalmente, un renovado ataque a la Ley Nacional de Relaciones Laborales —que irónicamente se ha convertido en un par de grilletes para el movimiento obrero— también podría impulsar la experimentación con enfoques alternativos para expandir el movimiento obrero mediante la negociación sectorial a nivel estatal. Estas perturbaciones sociales y económicas, al igual que cualquier episodio de reforma partidaria, resaltan la urgencia de crear una cultura de solidaridad que durante tanto tiempo ha estado ausente en la izquierda estadounidense.

Es imposible pronosticar si los efectos del ataque de Trump al estado y las contramovilizaciónes que este fomenta serán acumulativos. Lo que parece mucho más seguro en este momento es que, si no se modifica, la estructura organizativa de la nueva política —que ha demostrado ser incapaz de jugar a la ofensiva en las urnas— también verá superada su defensa.

Este artículo fue reimpresso de *Catalyst: A Journal of Theory and Strategy*, una publicación de la Fundación Jacobin.

Philip Rocco, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Marquette.

Foto tomada de: <https://jacobin.com/2025/08/democrats-ngos-jeffries-schumer-dealignment>